

Santiago, cuatro de mayo de dos mil veintiuno.

Al escrito folio N° 47827-2021: téngase presente.

Vistos:

Se confirma la sentencia apelada de veinte de abril de dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco, en el Ingreso Corte N° 74-2021.

Acordado con el voto en contra del Ministro señor Llanos, quien fue del parecer de revocar la resolución apelada y acoger el presente recurso de amparo, por los siguientes fundamentos:

1°.- Que por resolución de ocho de abril de dos mil veintiuno dictada por la Juez de Letras y Garantía de Traiguén, autoriza el traslado del amparado Pirce Valenzuela del Centro de Detención Preventiva de Traiguén al Complejo Penitenciario de Valdivia, fundándose en que Gendarmería tiene las facultades para disponer su traslado, las que ha ejercido mediante resolución fundada, como también se consideró la propia seguridad del imputado, así como la de los demás internos y personal de la unidad penal, adoptándose las medidas necesarias para resguardar sus derechos.

2°.- Que, por otro lado, la defensa del amparado ha acompañado un informe social que da cuenta que el amparado tienen arraigo familiar en la ciudad de Traiguén, además que su vivienda y lugar de trabajo se encuentra en dicha comuna y que no cuenta con antecedentes penales, antecedentes que no han sido controvertidos.

3°.- Que la facultad de autorizar el traslado de imputados sometidos a prisión preventiva se encuentra radicada en el juzgado de garantía que dispuso esa medida, la que supone una ponderación de las circunstancias de hecho que conducen al ejercicio de esa prerrogativa, evaluación que pertenece a la motivación de la decisión jurisdiccional, cuya ausencia contravendrá el principio de



razonabilidad y devendrá por ello en ilegal. Tales atribuciones conforman una herramienta de la autoridad que se caracteriza por otorgar un margen de libertad para decidir de una manera u otra, pero no obstante ello, jamás puede invocarse para encubrir una actuación que prive, perturbe o amenace los derechos fundamentales de alguna persona, pues por aplicación del artículo 6° de la Constitución Política de la República, la autoridad está obligada a respetar todas las normas del texto constitucional, entre las que se incluye el derecho a la libertad personal, a la seguridad individual y al debido proceso. La Constitución Política, en su artículo 19 N° 26, dispone que sólo una habilitación expresa de la ley puede autorizar una afectación en el ejercicio de derechos fundamentales y en tal caso, los hechos y fundamentos de derecho del acto de la autoridad que los limite, restrinja, prive, perturbe o amenace "deberán siempre expresarse", de acuerdo a lo que dispone el artículo 36 del Código Procesal Penal.

4°.- Que, en este contexto, aparece que la autorización de la medida de traslado fue adoptada en base a los delitos por lo que ha sido formalizado el amparado, la connotación pública de la causa, la calidad de funcionario judicial, sin que exista un centro penitenciario en la Región de la Araucanía que tenga la infraestructura adecuada para adoptar medidas tendientes al resguardo de la integridad del imputado, de los demás internos y personal de Gendarmería, pero obvia el deber de Gendarmería de orientar su labor a la resocialización de los internos que tiene a su cuidado, lo que importa, en la medida de lo posible, llevar a cabo la privación de libertad respetando el arraigo del imputado al lugar de residencia de los familiares que pudieran contribuir a dicho fin, aspecto que en este caso debió, primero haber sido sopesado y, segundo, haber primado ante la falta de infraestructura, sin que existiera una conducta reprochable cometida por el amparado para adoptar tal medida, motivos éstos expuestos de manera genérica



en la resolución en estudio que no aparecen de tal entidad para justificar el consiguiente desarraigo que el traslado conlleva, desde que Gendarmería es una institución profesional y cuyos miembros precisamente son formados para el manejo y contención de dificultades conductuales de los internos.

5°.- Que por otro lado, Gendarmería –y por ende el tribunal que autorizó la medida de traslado-, no dio cumplimiento a lo que dispone el Art. 25 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, en cuanto dispone que *“El régimen de los detenidos, sujetos a prisión preventiva y penados se sujetará a lo establecido en la Constitución Política de la República, los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes, la ley procesal pertinente, la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile y otras leyes y reglamentos relacionados con materias penitenciarias, y las normas del presente reglamento.”* En la especie, la medida impugnada evidentemente no se ajusta no solo a las disposiciones constitucionales, sino que además se aparta de tratados internacionales sobre derechos humanos. En particular, atenta contra la vinculación del amparado a su núcleo familiar y de la relación de aquel con sus hijos menores, trasgrediendo con ello el inciso segundo del artículo 1° de la Carta Fundamental, en cuanto se reconoce a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, su protección y fortalecimiento; y el artículo 9 de la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, en tanto dispone que los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres, y respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo en ambos casos si ello es contrario al interés superior del niño.

Tales derechos se ven conculcados en la especie, toda vez que de una parte no se ha justificado que el traslado dispuesto sea necesario para garantizar



la vida e integridad física o psíquica del amparado, de otros internos, o afecte el orden y seguridad del recinto –como exige el artículo 28 del reglamentos antes citado-; y de otra, porque las actuales restricciones derivadas de la sanitaria dificultan notablemente el traslado de la familia del recurrente a un recinto penitenciario localizado a cientos de kilómetros de su domicilio, en otra región del país.

6°.- Que, por lo expuesto, la resolución del juez de garantía que se reprocha carece de motivos que lo justifiquen, deficiencia que hace que aquélla sea ilegal, lo que constituye motivo suficiente para dejarla sin efecto.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 30.501-2021.



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Haroldo Osvaldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Andrés Llanos S. y los Abogados (as) Integrantes Diego Antonio Munita L., Ricardo Alfredo Abuaud D. Santiago, cuatro de mayo de dos mil veintiuno.

En Santiago, a cuatro de mayo de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

